

La Cubillos pone la agenda

«La calidad de mi trabajo y mi aporte a la universidad eran indiscutibles», se defendía nuevamente ayer la política Marcela Cubillos, al ser preguntada otra vez por su sueldo en la U. San Sebastián.

La delincuencia y el debate en torno al sueldo de Marcela Cubillos, relegan a un lugar secundario, después de cuatro semanas, la conversación en torno a Luis Hermosilla y el caso audios.

Sobre este caso, el 63% lo sigue asociando mayoritariamente a Luis Hermosilla, seguido de lejos por Andrés Chadwick (26%) y a los ministros de la Corte Suprema (19%).

Lo cierto es que la agenda periodística es clara. El sueldo de Marcela Cubillos, 17 millones de pesos mensuales, equivale a 34 sueldos mínimos en Chile. Esta cifra supera lo que ganan académicos, rectores de universidades estatales e incluso algunos profesores de las prestigiosas universidades de la Ivy League en Estados Unidos.

Lo más alarmante es la falta de evidencia de publicaciones académicas que justifiquen tal salario. La situación ha provocado que la Superintendencia de Educación Superior solicite a la Universidad San Sebastián (USS) un informe para esclarecer las razones detrás de este abultado sueldo.

Esto ha suscitado sospechas de lucro o financiamiento irregular de la política, una práctica prohibida para universidades que reciben fondos públicos en Chile.

Además, la conexión entre la Universidad San Sebastián y figuras políticas del gobierno del ex presidente Piñera es llamativa. La diputada RN Ximena Ossandón afirmó que «*cualquier persona que quedaba dando vueltas, terminaba en la USS*», refiriéndose al alto número de ex colaboradores de Piñera que hoy ocupan cargos en esa universidad.

Estamos en presencia de una red de poder que opera desde la derecha y que traspasa instituciones. No es solo una universidad que paga sueldos excepcionalmente millonarios con plata de todos los chilenos. No es solo tráfico de influencias en el nombramiento de jueces. No se trata solo de empresarios que evaden impuestos o no pagan los que corresponde.

De lo que estamos hablando es de cómo una misma red de poder ha expandido su influencia en el aparato estatal, los negocios, la educación y el sistema judicial, gracias a una circulación poco transparente -casi fraudulenta- de recursos públicos. Las familias chilenas son testigos de cómo estas instituciones son corrompidas por una élite que se beneficia de sus privilegios.